

Contraloría oficia al Gobierno por frase y expertos advierten impacto internacional

“ESTADO EN QUIEBRA”. Polémica por publicación oficial abre cuestionamientos a la estrategia comunicacional del Ejecutivo y sus efectos en la economía y la credibilidad del país.

Redacción

cronica@diarioatacama.cl

La Contraloría General de la República ofició al Gobierno tras la controversia generada por una publicación en redes sociales oficiales que aludía a un “Estado en quiebra”, mensaje que fue eliminado horas después de su difusión.

El requerimiento apunta a que la Segegob explique el uso de recursos públicos en la elaboración del contenido, así como el sustento técnico y normativo de la afirmación. El organismo fiscalizador dio un plazo acotado para responder, en un caso que no solo aborda el fondo del mensaje, sino también el uso de canales institucionales.

La publicación se enmarcaba en la explicación del alza en los combustibles y generó inmediatas reacciones políticas y técnicas, además de desmarques dentro del propio Ejecutivo. Desde el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, se descartó el concepto de “quiebra”, insistiendo en que el país enfrenta estrechez fiscal, pero no una situación de insolvencia.

CRÍTICAS TÉCNICAS

Para el director del Doctorado en Comunicación de la Univer-



LA FRASE CAUSÓ POLÉMICA POR SU MAL TIMING.

sidad de los Andes, Guillermo Bustamante, la frase utilizada tiene implicancias que van más allá del debate interno.

“La frase ‘el Estado en quiebra’ es absolutamente desafortunada y con una carga política internacional muy perjudicial para Chile que pone en entredicho la política económica actual y futura”, sostuvo.

El académico explicó que este tipo de declaraciones puede afectar directamente la percepción externa del pa-

ís. “Un Estado que está en quiebra no puede cumplir con sus compromisos y obligaciones internacionales, lo que dificulta que otros Estados y organismos internacionales quieran invertir o prestar ayuda económica. Cae la reputación y la evaluación del país”, advirtió.

En esa línea, enfatizó que el impacto es mayor al de una disputa política. “No se trata de una simple declaración para traspasar responsabilidad,

sino de algo que incide en el presente y futuro del país”, afirmó, agregando que es necesario revisar las políticas comunicacionales para evitar “errores no forzados”.

PROBLEMA ESTRUCTURAL

Una mirada similar planteó Claudio Elortegui, doctor en Ciencias de la Comunicación, quien apuntó a un problema de fondo en la forma de comunicar del Ejecutivo.

“Es muy difícil sostener

una frase así por las evidencias existentes y también por los efectos que genera”, indicó.

Según el especialista, existe una confusión entre los estilos comunicacionales propios de una campaña electoral y aquellos que corresponden a un gobierno en ejercicio. “Hay un problema serio en las comunicaciones del gobierno, que es no entender que el contexto comunicacional de un gobierno es muy diferente al de una candidatura”, señaló.

Elortegui agregó que este tipo de estrategias, marcadas por alta intensidad digital y mensajes categóricos, pueden ser funcionales en elecciones, pero no en la gestión pública. “La sobriedad, la información veraz y útil para la ciudadanía son exigencias propias de la comunicación gubernamental, y eso no se está apreciando con claridad”, sostuvo.

LÓGICA DE CAMPAÑA

El diagnóstico es compartido por Cristián Leporati, profesor de comunicación política y gubernamental de la Universidad Diego Portales, quien planteó que el Gobierno mantiene un esquema comunicacional propio de campaña.

“La comunicación electoral busca ganar elecciones y

suele ser agresiva. Pero cuando se asume el gobierno, se entra en otra etapa que prioriza la información y la generación de consensos”, explicó.

A su juicio, el problema radica en que ese cambio no se ha producido. “El gobierno mantiene un ritmo y contenido propios de una campaña electoral cuando esta ya terminó”, afirmó.

Leporati advirtió que esta estrategia puede tener consecuencias políticas y sociales. “Divide en lugar de unir, separa en vez de construir, y conlleva riesgos evidentes”, señaló, agregando que este tipo de narrativa ha sido observado en otros países, pero no necesariamente es replicable en Chile.

IMPACTO EN DESARROLLO

El caso abre un debate más amplio sobre los límites de la comunicación gubernamental y su impacto en la economía, la política y la confianza institucional.

La intervención de la Contraloría instala un precedente respecto al uso de redes sociales oficiales, mientras que las críticas de expertos apuntan a la necesidad de ajustar el tono y contenido de los mensajes en un contexto donde las palabras pueden tener efectos concretos en la imagen y proyección del país.